

**COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
RESOLUCIÓN 75/2024**

Medidas Cautelares No. 1134-24

Gersom Antonio Zeledón Motta y otras tres personas respecto de Nicaragua

24 de octubre de 2024

Original: español

I. INTRODUCCIÓN

1. El 11 de octubre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por la Unidad de Defensa Jurídica (“la parte solicitante” o “los solicitantes”) instando a la Comisión a que requiera al Estado de Nicaragua (“el Estado” o “Nicaragua”) la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Gersom Antonio Zeledón Motta, Eveling Carolina Matus Hernández, Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, y Carmen María Sáenz Martínez (“las personas propuestas beneficiarias”). Según la solicitud, tras la detención de las personas propuestas beneficiarias, entre marzo y agosto de 2024, no se conocería su paradero actual en Nicaragua.

2. En los términos del artículo 25.5 de su Reglamento, la CIDH pidió información al Estado el 16 de octubre de 2024. A la fecha, no se ha recibido respuesta, encontrándose vencido el plazo otorgado.

3. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por la parte solicitante, la Comisión considera que la información presentada demuestra *prima facie* que las personas propuestas beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, se solicita a Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de las personas beneficiarias, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal; b) informe si las personas beneficiarias se encuentran bajo custodia del Estado, las circunstancias y condiciones de su detención. En particular, informar sobre el lugar de su detención, permitiendo el acceso a sus representantes legales y familiares, así como las atenciones en salud que resulten necesarias, y asegurar que sean presentados ante autoridades judiciales para la revisión y monitoreo de su eventual detención; y c) informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.

II. ANTECEDENTES

4. Tras el inicio de la crisis de la situación de derechos humanos en Nicaragua y la visita de trabajo realizada en mayo de 2018, la Comisión conformó el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), con miras a dar seguimiento a las recomendaciones hechas al Estado, así como mantener el monitoreo respectivo para los fines pertinentes a los mandatos de la CIDH¹. Del mismo modo, la CIDH instaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Nicaragua, el cual emitió un informe que analizó los hechos ocurridos en abril y mayo de 2018². Por su parte, la CIDH decidió incluir en su Informe Anual

¹ CIDH, Comunicado de Prensa No. 134/18, CIDH presenta informe sobre grave situación de derechos humanos en Nicaragua, 22 de junio de 2018; Comunicado de Prensa No. 135/18, [CIDH instala el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua \(MESENI\)](#), 25 de junio de 2018; Comunicado de Prensa No. 274/18, [Comunicado sobre Nicaragua](#), 19 de diciembre de 2018; Comunicado de Prensa No. 113/20, [A dos años de su visita a Nicaragua, la CIDH advierte y condena el incumplimiento de sus recomendaciones y llama urgentemente al Estado a implementarlas](#), 16 de mayo de 2020.

² CIDH, Comunicado de Prensa No. 145/18, [CIDH anuncia la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua](#), 2 de julio de 2018; GIEI, [Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018](#), 21 de diciembre de 2018.

a Nicaragua en el Capítulo IV.B a partir de 2018, conforme a las causales establecidas en su Reglamento³. De manera paralela, la Comisión, en el marco de su mandato de monitoreo, ha emitido informes respecto al contexto de Nicaragua en materia de derechos humanos, en los cuales también realiza una serie de recomendaciones al Estado, en aras de garantizar el respeto y salvaguarda de los derechos de las personas conforme a sus obligaciones internacionales⁴.

5. Sumado a lo anterior, la Comisión se ha pronunciado, en forma consistente, mediante comunicados de prensa, expresando su preocupación sobre la creciente crisis y graves violaciones de derechos humanos en el país, desde sus distintas aristas. Entre ellas, se ha referido a la persistencia de los actos de persecución⁵; la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositoras al Gobierno, defensoras de derechos humanos y de la prensa independiente⁶; la impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho⁷; la criminalización en contra de líderes y lideresas de la oposición nicaragüense⁸; la deportación de personas privadas de libertad por motivos políticos y la pérdida de nacionalidad⁹; la escalada represiva en contra de integrantes de la Iglesia Católica¹⁰; la ausencia de condiciones para realizar elecciones libres y justas en el país¹¹; las detenciones arbitrarias de personas defensoras, periodistas e integrantes de la Iglesia Católica¹²; y la estrategia represiva desplegada por el Ejecutivo para el silenciamiento de las voces críticas al gobierno, de cara a las elecciones regionales programadas para el 2024¹³.

³ CIDH, Informe Anual 2018, Capítulo IV.B Nicaragua; Informe Anual 2019, Capítulo IV.B Nicaragua, 24 de febrero de 2020; Informe Anual 2020, Capítulo IV.B Nicaragua, 2 de febrero de 2021; Informe Anual 2021, Capítulo IV.B Nicaragua, mayo de 2022; Informe Anual 2023, Capítulo IV.B Nicaragua, 31 de diciembre de 2023.

⁴ CIDH, Informe: Cierre del espacio cívico en Nicaragua, OEA/Ser.L/VIII.Doc.212/23, 23 de septiembre de 2023; Informe sobre Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 285, 5 de octubre de 2020; Informe sobre Migración forzada de personas Nicaragüenses a Costa Rica, OEA/Ser.L/V/II. Doc.150, 8 de septiembre de 2019; Informe sobre Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, OEA/Ser.L/V/II.Doc.86, 21 de junio de 2018.

⁵ CIDH, Comunicado de Prensa No. 6/19, CIDH denuncia el debilitamiento del Estado de Derecho ante las graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad en Nicaragua, 10 de enero de 2019; Comunicado de Prensa No. 26/19, CIDH denuncia escalada de ataques a la prensa y persistencia de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, 6 de febrero de 2019; Comunicado de Prensa No. 90/19, CIDH condena persistencia de actos de represión en Nicaragua en el contexto de la Mesa de Negociación, 5 de abril de 2019.

⁶ CIDH, Comunicado de Prensa No. 80/20, A dos años de iniciada la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la CIDH reitera su compromiso permanente con las víctimas y constata consolidación de una quinta etapa de represión, 18 de abril de 2020; Comunicado de Prensa No. 152/21, La CIDH condena el grave escalamiento de la represión en Nicaragua, 18 de junio de 2021.

⁷ CIDH, Comunicado de Prensa No. 93/21, A tres años del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la CIDH condena la persistencia de la impunidad, 19 de abril de 2021.

⁸ CIDH, Comunicado de Prensa No. 145/21, La CIDH y la OACNUDH condenan categóricamente la persecución penal en contra de precandidatos y precandidatas presidenciales e instan al Estado de Nicaragua a su inmediata liberación, 9 de junio de 2021; Comunicado de Prensa No. 171/21, Nicaragua: CIDH y OACNUDH urgen poner fin a las detenciones arbitrarias y a liberar a todas las personas detenidas desde el inicio de la crisis, 9 de julio de 2021; Comunicado de Prensa No. 238/21, La CIDH y la OACNUDH condenan criminalización, faltas al debido proceso y graves condiciones de detención de personas consideradas como opositoras en Nicaragua, 10 de septiembre de 2021; Comunicado de Prensa RD026/22, REDESCA condena la cancelación de la personería de 26 universidades y asociaciones de fines académicos y sociales por la Asamblea Nacional de Nicaragua, 10 de febrero de 2022.

⁹ CIDH, Comunicado de Prensa No.021/23, CIDH saluda la excarcelación de personas presas políticas en Nicaragua y rechaza privación arbitraria de nacionalidad, 13 de febrero de 2023.

¹⁰ CIDH, Comunicado de Prensa No. 184/22, CIDH condena hechos de represión y la detención de integrantes de la Iglesia Católica en Nicaragua, 19 de agosto de 2022.

¹¹ CIDH, Comunicado de Prensa No. 248/22, CIDH advierte falta de condiciones para realizar elecciones municipales libres y justas en Nicaragua, 4 de noviembre de 2022.

¹² CIDH, Comunicado de Prensa No. 123/23, CIDH rechaza continua represión y violaciones de derechos humanos en Nicaragua, 16 de junio de 2023; Comunicado de Prensa No. 184/23, Nicaragua: CIDH y OACNUDH urgen al Estado a liberar a Monseñor Rolando Álvarez y a garantizar sus derechos humanos, 18 de agosto de 2023; Comunicado de Prensa No. 218/23, CIDH insta al Estado de Nicaragua a cesar la persecución contra la Iglesia Católica, 15 de septiembre de 2023.

¹³ CIDH, Comunicado de Prensa No. 243/23, CIDH y RELE: Nicaragua debe cesar represión contra comunidades indígenas de la Costa Caribe, 10 de octubre de 2023.

6. Considerando lo anterior, la Comisión ha urgido al Estado de Nicaragua, entre otros aspectos, a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos¹⁴; implementar las recomendaciones emitidas por la CIDH¹⁵; cesar los actos de persecución contra las personas identificadas como opositoras al gobierno y al restablecimiento de garantías democráticas¹⁶; liberar a las personas que permanecían detenidas de manera arbitraria, en condiciones inadecuadas de detención¹⁷; restablecer y hacer efectivo el pleno goce de los derechos civiles y políticos¹⁸; y poner fin a la represión y persecución de quienes buscan el retorno de la democracia en Nicaragua o ejercer sus libertades públicas¹⁹. De manera más reciente, el 11 de junio de 2024, la Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación por la grave situación de las personas privadas arbitrariamente de la libertad en Nicaragua, e instaron a garantizar su vida e integridad, así como a liberarlas de manera inmediata²⁰.

7. La Comisión tomó nota que el 5 de septiembre de 2024, 135 personas consideradas opositoras al régimen que permanecían detenidas arbitrariamente en Nicaragua bajo condiciones deplorables y alegaciones de tortura y malos tratos, fueron excarceladas y trasladadas a Guatemala. Sin embargo, repudió la privación arbitraria de su nacionalidad nicaragüense y la confiscación de sus bienes. De igual manera, la CIDH urgió a Nicaragua a garantizar el derecho a la nacionalidad, a cesar la represión en el país y a liberar de todas las personas que siguen detenidas arbitrariamente²¹.

8. Por último, la Comisión reafirmó su competencia sobre Nicaragua y continúa ejerciendo sus mandatos de monitoreo a través del MESENI, y el análisis y trámites de los casos, peticiones y medidas cautelares²².

III. RESUMEN DE HECHOS Y ARGUMENTOS

A. Información aportada por la parte solicitante

9. De acuerdo con la parte solicitante, las cuatro personas fueron privadas de su libertad por motivos políticos. Se indicó que las autoridades estatales estarían negando información sobre sus respectivas ubicaciones. La parte solicitante advirtió que no aparece una causa judicial en contra de las personas propuestas beneficiarias. Consideran casi imposible que representantes legales privados asuman la

¹⁴ CIDH, Comunicado de Prensa No. 6/19, CIDH denuncia el debilitamiento del Estado de Derecho ante las graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad en Nicaragua, 10 de enero de 2019; Comunicado de Prensa No. 26/19, CIDH denuncia escalada de ataques a la prensa y persistencia de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, 6 de febrero de 2019; Comunicado de Prensa No. 90/19, CIDH condena persistencia de actos de represión en Nicaragua en el contexto de la Mesa de Negociación, 5 de abril de 2019.

¹⁵ CIDH, Comunicado de Prensa No. 113/20, A dos años de su visita a Nicaragua la CIDH advierte y condena el incumplimiento de sus recomendaciones y llama urgentemente al Estado a implementarlas, 16 de mayo de 2020.

¹⁶ CIDH, Comunicado de Prensa No. 249/20, La CIDH llama a cesar de inmediato los actos de persecución contra las personas identificadas como opositoras al gobierno y al restablecimiento de garantías democráticas en Nicaragua, 10 de octubre de 2020.

¹⁷ CIDH, Comunicado de Prensa No. 145/21, La CIDH y la OACNUDH condenan categóricamente la persecución penal en contra de precandidatos y precandidatas presidenciales e instan al Estado de Nicaragua a su inmediata liberación, 9 de junio de 2021; Comunicado de Prensa No. 171/21, Nicaragua: CIDH y OACNUDH urgen poner fin a las detenciones arbitrarias y a liberar a todas las personas detenidas desde el inicio de la crisis, 9 de julio de 2021; Comunicado de Prensa No. 197/2022, CIDH y REDESCA: urge inmediata liberación de las personas presas políticas que están en condiciones deplorables en Nicaragua, 5 de septiembre de 2022.

¹⁸ CIDH, Comunicado de Prensa No. 218/22, Frente a las graves denuncias sobre el cierre de espacios cívicos en Nicaragua, relatores de ONU y CIDH exhortan a las autoridades a cumplir sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de las libertades fundamentales, 28 de septiembre de 2022.

¹⁹ CIDH, Comunicado de Prensa No.24/2023, La CIDH y la OACNUDH condenan la escalada de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, 17 de febrero de 2023.

²⁰ CIDH, Comunicado de Prensa No. 132/2024, Nicaragua: CIDH insta a garantizar la vida e integridad de las personas detenidas arbitrariamente y a su inmediata liberación, 11 de junio de 2024.

²¹ CIDH, Comunicado de Prensa No. 217/24, Nicaragua: CIDH repudia la privación arbitraria de nacionalidad de las 135 personas excarceladas, 13 de septiembre de 2024.

²² CIDH, Comunicado de Prensa 312/2021, CIDH reafirma su competencia sobre Nicaragua tras decisión de denunciar la Carta de la OEA en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, 20 de noviembre de 2021.

representación procesal de personas identificadas como “presas políticas”, pues tendrían miedo a represalias. Los recursos internos resultan ilusorios, ante los obstáculos de acceder al expediente judicial, sumado a la falta de independencia e imparcialidad judicial.

- ***Gersom Antonio Zeledón Motta***

10. Es contador público y habría sido privado de su libertad el 5 de marzo de 2024 por agentes policiales. Se encontraba en la casa de un cliente en Managua cuando fue interceptado por un operativo de la Policía Nacional liderado por el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como “El Chipote”. Al día siguiente, personas allegadas y familiares habrían preguntado sobre su ubicación a distintas estaciones policiales de Managua, incluyendo la del Distrito III, la Dirección de Auxilio Judicial y al Sistema Penitenciario Nacional. Les indicaron que no tenían registrado a persona con su nombre ni se le brindaría información. Al consultar en el Complejo Judicial de Managua sobre un proceso penal en su contra, los agentes judiciales señalaron que no tenían información sobre proceso en su contra, y no aparecería en el Sistema Nicarao²³. Personas cercanas al propuesto beneficiario habrían recibido “mensajes” no oficiales de presuntos comisionados policiales de Managua, pidiéndoles diversos montos de dinero a cambio de información o su liberación. Se informó que el propuesto beneficiario padecería de problemas crónicos de pulmones (alergia con tos constante).

- ***Eveling Carolina Matus Hernández***

11. Es emprendedora y tendría una agencia de envíos de paquetería. Habría participado como manifestante en las protestas antigubernamentales en Nicaragua de 2018. Fue privada de su libertad el 25 de junio de 2024 por agentes policiales al ser interceptada por un vehículo con miembros de la Dirección de Auxilio Judicial. Habría sido detenida junto a su esposo. No se informaron los motivos de la detención ni se presentaron órdenes de captura. Su negocio fue allanado por agentes policiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), supuestamente sin orden judicial. Funcionarios policiales interrogaron a la propuesta beneficiaria sobre su negocio y si alguna vez ha traído chalecos antibalas o armas desde Miami. Fue trasladada al Distrito III de la Policía Nacional, donde continuarían interrogándola²⁴.

12. El 27 de junio de 2024, el esposo de la señora Matus fue liberado bajo la advertencia de que ella seguiría detenida y él vigilado. El 3 de julio, la señora Matus Hernández habría sido trasladada en un bus del Establecimiento Penal Integral de Mujeres (EPIM). El 4 de julio de 2024, su esposo habría ido al EPIM a preguntar sobre su paradero, pero las autoridades penitenciarias le dijeron que ahí no tenían personas registradas con su nombre. Desde entonces, habría ido a preguntar por su paradero en más de 22 ocasiones, pero se le seguiría negando información. En el Complejo Judicial y en el Sistema Nicarao no se ha obtenido información de la existencia de un proceso penal en su contra.

- ***Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda***

13. Es administradora del programa Apoyo Financiero Urbano y Rural (PROAFUR) de la Asociación Cáritas Diocesana de Matagalpa, organización dirigida por la diócesis católica de dicha ciudad. Habría sido detenida el 10 de agosto de 2024 por agentes policiales uniformados y de civil. Tales personas se presentaron en una finca en Matagalpa a preguntar por la propuesta beneficiaria y le dijeron que los tenían que

²³ Sistematización de las causas judiciales en el país.

²⁴ El interrogatorio fue sobre si conocía al Ministro de Hacienda Iván Costa y la Viceministra; por qué no había votado en las elecciones desde 2011; quiénes eran sus amistades; por qué tenía contactos de ex candidatos presidenciales de la oposición en su teléfono; si había recibido financiamiento externo para su negocio; y por qué le había dado “me gusta” a una publicación en la red social X que decía que Monseñor Silvio Báez era su verdadero líder.

acompañar para “hacer unas preguntas” en Managua. No indicaron los motivos ni presentaron orden de captura.

14. El 11 de agosto de 2024, personas allegadas habrían ido a preguntar sobre su paradero y motivos de detención al Distrito III de la Policía en Managua, a la Dirección de Auxilio Judicial y al Establecimiento Penal Integral de Mujeres (EPIM), pero no obtendrían información concreta. En el EPIM, le habrían dicho que se encontraba en “El Chipote”. Cuando han ido al “El Chipote” les dirían que está en el EPIM. Desde principios de octubre de 2024 en el EPIM se permitiría dejar paquetes con productos básicos de higiene. Sin embargo, las autoridades no confirmarían si está ahí ni se permitiría verla, a pesar de indicios que estaría recluida en ese lugar. Las personas allegadas seguirían buscándola a la fecha.

- ***Carmen María Sáenz Martínez***

15. Es abogada y laboró en el Poder Judicial en Matagalpa hasta 2018. Asimismo, fue asesora en derecho canónico en la Diócesis de Matagalpa. Habría sido privada de su libertad el 10 de agosto de 2024 por agentes policiales, quienes allanaron su vivienda presuntamente sin ninguna orden judicial y la interrogaron. Luego, procedieron a trasladarla con rumbo desconocido, sin informarse los motivos u orden de captura. Desde esa fecha, personas allegadas fueron a buscarla al Distrito Policial III de Managua, al Chipote, al EPIM y al Centro Policial Plaza el Sol. En los primeros días tras su detención, en Plaza el Sol les indicaron que estaba recluida en el Distrito III. Sin embargo, en ese lugar dijeron que estuvo ahí, pero fue trasladada al EPIM. En el EPIM se negaría su paradero hasta la actualidad. El 1 de octubre de 2024, las autoridades penitenciarias del EPIM permitieron que le dejaran paquetería con insumos básicos, pero no darían carné de visitante. La propuesta beneficiaria padecería de migraña y de retención de líquidos en sus pies para lo cual tomaría el medicamento llamado “Hidramide”, que no le estarían proporcionando.

B. Respuesta del Estado

16. La CIDH solicitó información al Estado el 16 de octubre de 2024. A la fecha, no se ha recibido respuesta.

IV. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE GRAVEDAD, URGENCIA E IRREPARABILIDAD

17. El mecanismo de medidas cautelares es parte de la función de la Comisión de supervisar el cumplimiento con las obligaciones de derechos humanos previstas en el artículo 41 (b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recogido también en el artículo 18 (b) del Estatuto de la CIDH. El mecanismo de medidas cautelares es descrito en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión. De conformidad con ese artículo, la Comisión otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, y en las cuales tales medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas.

18. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“la Corte Interamericana” o “Corte IDH”) han sostenido de manera reiterada que las medidas cautelares y provisionales tienen un doble carácter, uno tutelar y otro cautelar²⁵. Respecto del carácter tutelar, las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos²⁶. Para ello, se debe hacer una valoración del problema planteado, la efectividad de las acciones estatales frente a la situación descrita y el grado de

²⁵ Corte IDH, [Caso del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II \(Cárcel de Yare\)](#), Medidas Provisionales respecto de la República Bolivariana de Venezuela, Resolución del 30 de marzo de 2006, considerando 5; [Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala](#), Medidas provisionales, Resolución del 6 de julio de 2009, considerando 16.

²⁶ Corte IDH, [Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II](#), Medidas Provisionales respecto de Venezuela, Resolución del 8 de febrero de 2008, considerando 8; [Caso Bámaca Velásquez](#), Medidas provisionales respecto de Guatemala, Resolución del 27 de enero de 2009, considerando 45; [Asunto Fernández Ortega y otros](#), Medidas Provisionales respecto de México, Resolución del 30 de abril de 2009, considerando 5; [Asunto Milagro Sala](#), Medidas Provisionales respecto de Argentina, Resolución del 23 de noviembre de 2017, considerando 5.

desprotección en que quedarían las personas sobre quienes se solicitan medidas en caso de que estas no sean adoptadas²⁷. Con respecto al carácter cautelar, las medidas cautelares tienen como propósito preservar una situación jurídica mientras está siendo estudiada por la CIDH. El carácter cautelar tiene por objeto y fin preservar los derechos en posible riesgo hasta tanto se resuelva la petición que se encuentra bajo conocimiento en el sistema interamericano. Su objeto y fin son los de asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de fondo y, de esta manera, evitar que se lesionen los derechos alegados, situación que podría hacer inócua o desvirtuar el efecto útil (*effet utile*) de la decisión final. En tal sentido, las medidas cautelares o provisionales permiten así que el Estado en cuestión pueda cumplir la decisión final y, de ser necesario, cumplir con las reparaciones ordenadas²⁸. Con miras a tomar una decisión, y de acuerdo con el artículo 25.2 de su Reglamento, la Comisión considera que:

- a. la “gravedad de la situación” significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano;
- b. la “urgencia de la situación” se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y
- c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

19. En el análisis de los mencionados requisitos, la Comisión reitera que los hechos que motivan una solicitud de medidas cautelares no requieren estar plenamente comprobados. La información proporcionada, a efectos de identificar una situación de gravedad y urgencia, debe ser apreciada desde un estándar *prima facie*²⁹. La Comisión recuerda también que, por su propio mandato, no le corresponde determinar responsabilidades individuales por los hechos denunciados. Asimismo, tampoco corresponde, en el presente procedimiento, pronunciarse sobre violaciones a derechos consagrados en la Convención Americana u otros instrumentos aplicables³⁰, lo que atañe propiamente al Sistema de Peticiones y Casos. El estudio que se realiza a continuación se refiere de forma exclusiva a los requisitos del artículo 25 del Reglamento, lo que puede realizarse sin necesidad de entrar en valoraciones de fondo³¹.

20. La Comisión observa que la alegada situación de riesgo de las personas propuestas beneficiarias no corresponde a un evento aislado y se enmarca en el contexto actual por el que atraviesa Nicaragua, que es particularmente hostil hacia personas consideradas, percibidas o identificadas como

²⁷ Corte IDH, Asunto Milagro Sala, Medidas Provisionales respecto de Argentina, Resolución del 23 de noviembre de 2017, considerando 5; Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II, Medidas Provisionales respecto de Venezuela, Resolución del 8 de febrero de 2008, considerando 9; Asunto del Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, Medidas Provisionales respecto de Brasil, Resolución del 13 de febrero de 2017, considerando 6.

²⁸ Corte IDH, Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II, Medidas Provisionales respecto de Venezuela, Resolución del 8 de febrero de 2008, considerando 7; Asunto Diarios “El Nacional” y “Así es la Noticia”, Medidas Provisionales respecto de Venezuela, Resolución del 25 de noviembre de 2008, considerando 23; Asunto Luis Uzcátegui, Medidas Provisionales respecto de Venezuela, Resolución del 27 de enero de 2009, considerando 19.

²⁹ Corte IDH, Asunto Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua, Ampliación de Medidas Provisionales, Resolución del 23 de agosto de 2018, considerando 13; Asunto de los niños y adolescentes privados de libertad en el “Complejo do Tatuapé” de la Fundação CASA, Medidas Provisionales respecto de Brasil, Resolución del 4 de julio de 2006, considerando 23.

³⁰ CIDH, Resolución 2/2015, Medidas Cautelares No. 455-13, Asunto Nestora Salgado respecto de México, 28 de enero de 2015, párr. 14; Resolución 37/2021, Medidas Cautelares No. 96/21, Gustavo Adolfo Mendoza Beteta y familia respecto de Nicaragua, 30 de abril de 2021, párr. 33.

³¹ Al respecto, la Corte IDH ha señalado que esta “no puede en una medida provisional considerar el fondo de ningún argumento pertinente que no sea de aquellos que se relacionan estrictamente con la extrema gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a personas”. Ver al respecto: Corte IDH, Asunto James y otros respecto Trinidad y Tobago, Medidas Provisionales, Resolución del 29 de agosto de 1998, considerando 6; Caso Familia Barrios Vs. Venezuela, Medidas Provisionales, Resolución del 22 de abril de 2021, considerando 2.

opositoras al gobierno y, en general, hacia cualquier persona crítica del actual gobierno de Nicaragua³². Dicho contexto se ha intensificado en el tiempo³³.

21. Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión procederá a analizar los requisitos reglamentarios respecto de la situación de las personas propuestas beneficiarias en Nicaragua.

22. En lo que se refiere al requisito de *gravedad*, la Comisión considera que se encuentra cumplido, tomando en cuenta que, de acuerdo con los solicitantes, no se conocería el paradero o destino de las personas propuestas beneficiarias desde sus respectivas detenciones por parte agentes estatales entre marzo y agosto de 2024.

23. La Comisión observa que las personas propuestas beneficiarias habrían sido detenidas mediante operativos y/o allanamientos de sus respectivas viviendas, sin indicarse los motivos de su arresto. Tras los cuestionamientos en torno a la arbitrariedad de las detenciones, la Comisión no tiene elementos que acrediten que fueron presentadas ante tribunales competentes para la verificación de su situación. En ese sentido, la Comisión entiende que resulta prácticamente imposible para la parte solicitante y personas cercanas poder obtener información sobre expedientes judiciales, pues no se tiene registro oficial de ellos, en caso de existir.

24. La Comisión nota que, tras el arresto, personas allegadas a los propuestos beneficiarios se presentaron a los distintos centros penitenciarios en múltiples ocasiones con el fin de ubicar y conocer sobre su situación. A pesar de tales gestiones, las autoridades estatales no brindaron información oficial sobre el paradero actual de las personas propuestas beneficiarias. En algunos casos, las autoridades penitenciarias permitirán el ingreso de paquetería con insumos básicos, sin confirmarse si estas personas se encuentran recluidas en esos centros penitenciarios. Por tanto, a la fecha, no se ha logrado confirmar sus paraderos ni obtener información precisa sobre su estado actual.

25. Tras solicitar información al Estado en los términos del artículo 25 del Reglamento, la Comisión lamenta la falta de respuesta a la solicitud de información realizada. Si bien lo anterior no resulta suficiente *per se* para justificar el otorgamiento de una medida cautelar, la falta de respuesta del Estado impide conocer las medidas adoptadas que se estarían implementando para atender la situación de riesgo de las personas propuestas beneficiarias y controvertir los hechos alegados por la parte solicitante. Por lo tanto, la Comisión no cuenta con información que permita valorar si la situación de riesgo ha sido mitigada, o bien sobre las acciones tendientes a determinar el paradero o destino de las personas propuestas beneficiarias. Asimismo, la Comisión advierte que las personas propuestas beneficiarias podrían encontrarse bajo custodia del Estado, quien debería tener información sobre su ubicación y situación actual.

26. La Comisión entiende que las personas cercanas no cuentan con ningún tipo de comunicación sobre la situación jurídica de las personas propuestas beneficiarias, que permita conocer, por ejemplo: la existencia de un expediente de investigación en su contra; el estado procesal de la investigación; los motivos de la detención; la existencia de una orden de captura; si la causa judicial fue sujeta revisiones judiciales; el

³² CIDH, Informe: [Cierre del espacio cívico en Nicaragua](#), OEA/Ser.L/VIII, Doc. 212/23, 23 de septiembre de 2023, párrs. 6, 20 y 62; Informe Anual 2022, [Capítulo IV.B Nicaragua](#), párrs. 35-65 y 177; Comunicado de Prensa No. 123/23, [CIDH rechaza continua represión y violaciones de derechos humanos en Nicaragua](#), 16 de junio de 2023; Comunicado de Prensa No. 184/23, [Nicaragua: CIDH y OACNUDH urgen al Estado a liberar a Monseñor Rolando Álvarez y a garantizar sus derechos humanos](#), 18 de agosto de 2023; Comunicado de Prensa No. 218/23, [CIDH insta al Estado de Nicaragua a cesar la persecución contra la Iglesia Católica](#), 15 de septiembre de 2023; Comunicado de Prensa No. 152/21, [La CIDH condena el grave escalamiento de la represión en Nicaragua](#), 18 de junio de 2021; Comunicado de Prensa No. 2/21, [La CIDH condena la intensificación del hostigamiento en Nicaragua](#), 6 de enero de 2021; Informe Anual 2023, [Capítulo IV.B Nicaragua](#), 31 de diciembre de 2023, párrs. 5, 36 y 138.

³³ CIDH, Comunicado de Prensa No. 113/20, [A dos años de su visita a Nicaragua, la CIDH advierte y condena el incumplimiento de sus recomendaciones y llama urgentemente al Estado a implementarlas](#), 16 de mayo de 2020; Informe Anual 2020, [Capítulo IV.B Nicaragua](#), párrs. 46 a 52; Informe Anual 2023, [Capítulo IV.B Nicaragua](#), 31 de diciembre de 2023, párr. 19.

lugar de detención; las condiciones de detención en las que se encuentran; las posibilidades de poder contactarse con representación legal de su confianza; entre otros. Dado que no se ha logrado establecer ningún tipo de comunicación con las personas propuestas beneficiarias, su situación de riesgo se vería agravada ante la imposibilidad de conocer el lugar en el que se hallan y verificar su estado actual. Lo anterior impide a sus familiares y personas cercanas que puedan activar de manera oportuna los mecanismos internos para proteger sus derechos, dejando a las personas propuestas beneficiarias en una situación de total desprotección. Al respecto, la Comisión recuerda que la Corte Interamericana ha indicado, en el *Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua*, que “esta situación de detención incomunicada no solo impide constatar la situación actual de los propuestos beneficiarios, sus condiciones de detención y su estado de salud, sino que además supone un cercenamiento de las garantías procesales de toda persona detenida”³⁴.

27. En atención a las consideraciones previas y a luz del estándar *prima facie*, la Comisión estima que los derechos a la vida e integridad personal de las personas propuestas beneficiarias están en una situación de grave riesgo en la medida que, hasta el día de la fecha, no se tendría información oficial acerca de su destino o paradero, así como sobre su situación actual.

28. Respecto al requisito de *urgencia*, la Comisión considera que se halla igualmente cumplido, en la medida que el transcurso del tiempo sin establecerse su paradero es susceptible de generar mayores afectaciones a los derechos a la vida e integridad personal de las personas propuestas beneficiarias. En este sentido, no se conocería sobre su paradero, tampoco se ha obtenido ninguna información sobre su ubicación. De manera adicional, la Comisión no cuenta con información por parte del Estado que permita apreciar las acciones que se estarían tomando para atender o bien mitigar la situación de riesgo de las personas propuestas beneficiarias ni sobre cualquier medida para dar con su paradero.

29. En cuanto al requisito de *irreparabilidad*, la Comisión advierte que está cumplido, en la medida que la potencial afectación a los derechos a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad

V. PERSONAS BENEFICIARIAS

30. La Comisión declara personas beneficiarias a (1) Gersom Antonio Zeledón Motta, (2) Eveling Carolina Matus Hernández, (3) Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, y (4) Carmen María Sáenz Martínez, quienes se encuentran debidamente identificadas en este procedimiento.

VI. DECISIÓN

31. La Comisión Interamericana considera que el presente asunto reúne *prima facie* los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, se solicita a Nicaragua que:

- a) adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de las personas beneficiarias, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal;
- b) informe si las personas beneficiarias se encuentran bajo custodia del Estado, las circunstancias y condiciones de su detención. En particular, informar sobre el lugar de su detención, permitiendo el acceso a sus representantes legales y familiares, así como las atenciones en salud que resulten necesarias, y asegurar que sean presentados ante autoridades judiciales para la revisión y monitoreo de su eventual detención; y

³⁴ Corte IDH, *Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua*, Medidas Provisionales, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de junio de 2021, párrafo 36.

c) informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.

32. La Comisión solicita al Estado de Nicaragua que detalle, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica.

33. La Comisión resalta que, de acuerdo con el artículo 25 (8) de su Reglamento, el otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.

34. La Comisión instruye a su Secretaría Ejecutiva que notifique la presente resolución al Estado de Nicaragua y a la parte solicitante.

35. Aprobado el 24 de octubre de 2024, por Roberta Clarke, Presidenta; Carlos Bernal Pulido, Primer Vicepresidente; José Luis Caballero Ochoa, Segundo Vicepresidente; Edgar Stuardo Ralón Orellana; Arif Bulkan; Andrea Pochak; y Gloria Monique de Mees, integrantes de la CIDH.

Tania Reneaum Panszi
Secretaria Ejecutiva